

# Conflictos entre Carlos V y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla (1552-1556)

*Ignasi Fernández Terricabras*

Universidad de Barcelona

## Introducción

En la Edad Media, los cabildos de las catedrales constituyen un auténtico poder incluso por encima de los obispos, que a menudo son nombrados por los canónigos. El Cisma de Occidente trae consigo un proceso de centralización pontificia que arrebató a los cabildos esta facultad. Pero, gracias a su poder social y económico, los cabildos siguen siendo instituciones poderosas, capaces de contrarrestar las decisiones de los obispos. Gozan de un gran ascendiente sobre el clero diocesano y de importantes conexiones con las oligarquías locales.

En el siglo XVI, son numerosos los prelados que piensan que la obediencia de los cabildos a las decisiones de los obispos es una premisa indispensable para el éxito de cualquier intento de reforma eclesiástica. El concilio de Trento (1545-1563) les va a proporcionar los argumentos y los instrumentos jurídicos para disciplinar a los canónigos. Pero el clero capitular no se resigna. En la Corona de Castilla la resistencia de los cabildos adquiere gran virulencia. Por la importancia de sus connotaciones políticas y eclesiásticas, ni Carlos V ni el Papado pueden permanecer ajenos a esta disputa. Por el contrario, intervienen abiertamente en el problema, hasta convertirlo en un importante motivo de desavenencia entre la Corona y el Papado, que tienen intereses contrapuestos en juego.

La trama general de los hechos es ya bastante conocida<sup>1</sup> a partir de las cartas que diversos jesuitas enviaron a Roma<sup>2</sup> y de la documentación conservada en los archivos

---

<sup>1</sup> El mejor y más completo relato es el de GUTIÉRREZ, C., *Trento, un problema: la última convocatoria del Concilio (1552-1562)*, Madrid, 1995.

<sup>2</sup> CERECEDA, F., «El litigio de los cabildos y su repercusión en las relaciones con Roma (1551-1556)», *Razón y Fe*, núm. 130 (1944), pp. 215-234.

capitulares de Calahorra<sup>3</sup>, Pamplona<sup>4</sup> y Burgos<sup>5</sup>. El objetivo de esta comunicación es interrogarse sobre la implicación de la Corona en el conflicto entre los obispos y los cabildos a finales del reinado de Carlos V. Para ello, hemos recurrido a los legajos del Archivo General de Simancas, donde se conservan las cartas de los ministros reales, que ponen de manifiesto la lógica interna de la política del Emperador.

## Los hechos

El problema aparece desde el inicio del concilio de Trento, en 1545. Al tener noticia de la convocatoria, el cabildo de Toledo propone a los demás una reunión para organizar la defensa de sus derechos en el concilio, pero la Corona prohíbe su celebración<sup>6</sup>. Ya en Trento, el debate es tempestuoso. Los obispos hispanos son firmes partidarios de establecer la superioridad de su poder sobre los cabildos y de suprimir el sistema de exenciones jurisdiccionales y apelaciones a Roma que permite a los canónigos eludir sus decisiones, cuando no desobedecerlas abiertamente. Pero la Curia romana ve con buenos ojos ese sistema, que implica conservar la primacía de la jurisdicción pontificia.

A causa de esta presión, en 1547 la sesión VI del concilio (De Ref., c. 4) autoriza a los obispos a visitar personalmente los cabildos exentos y a castigar las conductas indecentes de sus miembros. No obstante, la interpretación que defienden los legados de Paulo III en Trento es muy estricta: el decreto sólo autoriza a los obispos a visitar las catedrales —no las colegiatas—, si han tenido noticia de un delito cometido por clérigos que el cabildo no haya querido castigar. Queda excluida, además, toda catedral en cuya acta de fundación se hubiera declarado la exención del poder episcopal. En Trento se crea una comisión para examinar los documentos presentados por los cabildos y establecer cuáles son las iglesias comprendidas en el decreto. Los cabildos castellanos procuran aprovechar las diferencias entre los padres para pedir una nueva declaración

<sup>3</sup> MARÍN MARTÍNEZ, T., «Primeras repercusiones tridentinas: el litigio de los cabildos españoles. Su proceso en la diócesis de Calahorra», *Hispania Sacra*, 1 (1948), pp. 325-349.

<sup>4</sup> GOÑI GAZTAMBIDE, J., «Los cabildos españoles y la confirmación del Concilio de Trento», *Annuaire de l'histoire des conciles*, 1975, pp. 425-458; retomado en *Historia de los Obispos de Pamplona*, Pamplona, 1985, III, pp. 454-484, y IV, pp. 66-73.

<sup>5</sup> SERRANO, L., «Anotación al tema: el Papa Paulo IV y España», *Hispania* núm. 10 (1943), pp. 293-325; MANSILLA, D., «Reacción del cabildo de Burgos ante las visitas y otros actos de jurisdicción intentados por sus obispos (siglos XIV-XVII)», *Hispania Sacra*, núm. 10 (1957), pp. 135-159; LÓPEZ MARTÍNEZ, N., «El cardenal Mendoza y la Reforma Tridentina en Burgos», *Hispania Sacra*, núm. 16 (1963), pp. 61-137; GIL SANJUAN, J., «Lucha de los cabildos castellanos por su autonomía y libertad (1553-1555)», *Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna*, 7 (1994), pp. 275-295.

<sup>6</sup> El cabildo de Granada rechaza participar en esa reunión. MARÍN LÓPEZ, R., «El cabildo de la Catedral de Granada ante el Concilio de Trento», *Archivo Teológico Granadino*, 57 (1994), pp. 244-245.

del concilio a su favor. Sin embargo, el Consejo de Castilla les impide enviar memoriales o un delegado a Trento <sup>7</sup>.

Como es sabido, desavenencias entre Carlos V y Paulo III provocan la suspensión del concilio en 1548. Los obispos que, entre tanto, intentan enviar un visitador o afirmar su jurisdicción episcopal, topan con la oposición de los cabildos, que invocan una exención inmemorial o desde su fundación, lo que les excluye del decreto tridentino. De esta manera, se diluye el potencial reformador del concilio, pues prácticamente todos los cabildos hispanos pretenden gozar de exención perpetua. Francisco de Vargas, designado por Carlos V representante de la Corona de Castilla en el concilio, se queja vigorosamente: «si los abusos se han de defender por costumbre inmemorial, desde aquel día digo que está cerrada la puerta al remedio para siempre» <sup>8</sup>.

Cuando, en 1551, Julio III ordena reanudar el concilio, los obispos hispanos se encuentran con que la mayoría conciliar se opone a su petición de derogar todas las exenciones. Aunque el decreto de la sesión XIV (De Ref., c. 4) afirma que los obispos pueden corregir y castigar a los clérigos incluso fuera de la visita, muchos juristas sostienen que el término «*saeculares clericos*» no comprende a los canónigos. Además, el decreto precisa que sólo pueden ponerlo en ejecución los obispos que residan y que lo apliquen personalmente, no por mediación de algún vicario, y que sólo pueden actuar como delegados de la Sede Apostólica. En fin, se indica que las exenciones perpetuas deben ser mantenidas.

En 1552, la situación militar europea fuerza a suspender el concilio. Los padres parten precipitadamente, no sin antes aprobar un texto en el que se exhorta a los soberanos católicos a aplicar sus decretos. Varios obispos vuelven a sus sedes decididos a ponerlos en práctica inmediatamente, en particular el canon relativo a la visita de los cabildos. Cuentan con el apoyo de Carlos V que, a diferencia de lo que hizo en 1548, cuando decidió que se retrasase la ejecución de los decretos, ahora ordena ponerlos en práctica <sup>9</sup>. Conscientes del peligro, una decena de cabildos castellanos forman una junta para defenderse <sup>10</sup>. Deciden enviar a Roma un procurador conjunto, el canónigo de Burgos Agustín Castrillo <sup>11</sup>.

<sup>7</sup> GONÍ, J., «Los cabildos...», *op. cit.*, p. 426; SERRANO, L., «Anotación...», *op. cit.*, pp. 294-295. También los cabildos alemanes y austriacos protestan: JEDIN, H., *Historia del Concilio de Trento*, Pamplona, 1975, 2, pp. 412-415.

<sup>8</sup> Citado por GONÍ, J., *Historia...*, *op. cit.*, III, p. 456. Un ejemplo de visita frustrada es la que intenta realizar un visitador episcopal en Calahorra en 1547: MARÍN MARTÍNEZ, T., «Primeras...», *op. cit.*, p. 330. También hubo problemas en Burgos: GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, pp. 4-12.

<sup>9</sup> GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, p. 549.

<sup>10</sup> La lista de participantes dada por GONÍ (*Historia...*, *op. cit.*, III, p. 457) no coincide con la de SERRANO («Anotación...», *op. cit.*, p. 296). Aunque con menos tensión, el mismo problema se da en Portugal: a petición del rey Juan III, el papa Julio III ordena aplicar el concilio, lo que alarma a los canónigos castellanos: JEDIN, H., *Chiesa della fede, Chiesa della storia*, Brescia, 1972, p. 202; GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, p. 20.

<sup>11</sup> Sobre su actuación en Roma, GIL SANJUAN, J., «Lucha...», *op. cit.*, pp. 275-294. El papel directivo

haber publicado la decisión de la Rota. Numerosos prebendados huyen y, para que los oficios puedan continuar celebrándose en la catedral, el obispo debe recurrir a los curas de la ciudad. El Consejo de Castilla condena a cada dignidad detenida a una multa de 400 ducados y el cabildo acaba por ceder <sup>16</sup>.

Los sucesos de Segovia son seguidos con atención en Roma. El 16 de julio de 1554, el secretario de la embajada, Hernando de Montesa, escribe que ya está preparada la citación para que el obispo Zúñiga comparezca personalmente en Roma. Sólo una carta del obispo declarando que él no ha querido incurrir en censuras de la Santa Sede pero que se ha visto obligado a cumplir las órdenes de la Princesa Gobernadora y del Consejo le salva en el último instante <sup>17</sup>.

Graves hechos tienen lugar también en Calahorra. Su obispo, Bernal Díaz de Luco, se ha distinguido en Trento por haber sido el más firme defensor de la abolición de las exenciones capitulares. Cuando Luco intenta visitar la catedral, los canónigos rechazan incluso las órdenes del Consejo de Castilla. El 6 de mayo de 1554 abandonan la catedral y el obispo se ve obligado a descerrajar varias dependencias y armarios de la iglesia para efectuar la visita. Luco excomulga a todo el cabildo y el Consejo de Castilla ordena, el 25 de julio de 1554, el destierro a Portugal del deán, de un arcediano y de un canónigo, así como la confiscación de los bienes del cabildo. Tras esta condena, los miembros del cabildo se resignan a la visita, no sin antes apelar contra el obispo <sup>18</sup>.

Los conflictos se multiplican por la Corona. En Burgos, cinco miembros del cabildo son desterrados. En Pamplona, el obispo excomulga a casi todo el cabildo. Algunos canónigos son encarcelados y multados también, al menos, en Zamora, León, Astorga, Oviedo y Sevilla <sup>19</sup>. Pero en Sevilla parece que prima el conflicto político interno: el arzobispo Valdés acusa al capitular Antonio de Eraso, hermano del secretario Francisco de Eraso, de haber provocado la indisciplina del cabildo contra sus oficiales <sup>20</sup>. No obstante, hay algunas diócesis en las que las cosas suceden más razonablemente. Por ejemplo, el obispo de Palencia, Pedro La Gasca, comunica que su visita al cabildo, por otra parte muy moderada, se ha desarrollado sin problemas <sup>21</sup>.

La injerencia del poder real en un conflicto entre instancias eclesiásticas y las limitaciones impuestas al nuncio fuerzan una nueva intervención pontificia. En Roma, Castriello ha creado con habilidad y con numerosas dádivas un estado de opinión favorable a los cabildos. El Papa, discutiendo con el secretario Montesa la renovación del pago

<sup>16</sup> CERECEDA, F., «El litigio...», *op. cit.*, pp. 217-221.

<sup>17</sup> AGS, E, 881, fol. 46.

<sup>18</sup> MARÍN MARTÍNEZ, T., «Primeras...», *op. cit.*, pp. 325-349.

<sup>19</sup> LÓPEZ MARTÍNEZ, N., «El cardenal...», *op. cit.*, p. 76; GONÍ, J., *Historia...*, *op. cit.*, III, pp. 460-464; GIL SANJUÁN, J., «Lucha...», *op. cit.*, pp. 285-286 y 289; GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, pp. 25-60.

<sup>20</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 256. Sobre la rivalidad entre ambos ministros, miembros de facciones diferentes, MARTÍNEZ MILLÁN, J., y DE CARLOS MORALES, C. J., *Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispánica*, Valladolid, 1998, pp. 61-65.

<sup>21</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 215. Algunos episodios de esta visita son narrados en CABEZA, A., *La vida en una catedral del Antiguo Régimen*, Palencia, 1997, pp. 62-68.

haber publicado la decisión de la Rota. Numerosos prebendados huyen y, para que los oficios puedan continuar celebrándose en la catedral, el obispo debe recurrir a los curas de la ciudad. El Consejo de Castilla condena a cada dignidad detenida a una multa de 400 ducados y el cabildo acaba por ceder <sup>16</sup>.

Los sucesos de Segovia son seguidos con atención en Roma. El 16 de julio de 1554, el secretario de la embajada, Hernando de Montesa, escribe que ya está preparada la citación para que el obispo Zúñiga comparezca personalmente en Roma. Sólo una carta del obispo declarando que él no ha querido incurrir en censuras de la Santa Sede pero que se ha visto obligado a cumplir las órdenes de la Princesa Gobernadora y del Consejo le salva en el último instante <sup>17</sup>.

Graves hechos tienen lugar también en Calahorra. Su obispo, Bernal Díaz de Luco, se ha distinguido en Trento por haber sido el más firme defensor de la abolición de las exenciones capitulares. Cuando Luco intenta visitar la catedral, los canónigos rechazan incluso las órdenes del Consejo de Castilla. El 6 de mayo de 1554 abandonan la catedral y el obispo se ve obligado a descerrajar varias dependencias y armarios de la iglesia para efectuar la visita. Luco excomulga a todo el cabildo y el Consejo de Castilla ordena, el 25 de julio de 1554, el destierro a Portugal del deán, de un arcediano y de un canónigo, así como la confiscación de los bienes del cabildo. Tras esta condena, los miembros del cabildo se resignan a la visita, no sin antes apelar contra el obispo <sup>18</sup>.

Los conflictos se multiplican por la Corona. En Burgos, cinco miembros del cabildo son desterrados. En Pamplona, el obispo excomulga a casi todo el cabildo. Algunos canónigos son encarcelados y multados también, al menos, en Zamora, León, Astorga, Oviedo y Sevilla <sup>19</sup>. Pero en Sevilla parece que prima el conflicto político interno: el arzobispo Valdés acusa al capitular Antonio de Eraso, hermano del secretario Francisco de Eraso, de haber provocado la indisciplina del cabildo contra sus oficiales <sup>20</sup>. No obstante, hay algunas diócesis en las que las cosas suceden más razonablemente. Por ejemplo, el obispo de Palencia, Pedro La Gasca, comunica que su visita al cabildo, por otra parte muy moderada, se ha desarrollado sin problemas <sup>21</sup>.

La injerencia del poder real en un conflicto entre instancias eclesiásticas y las limitaciones impuestas al nuncio fuerzan una nueva intervención pontificia. En Roma, Castriello ha creado con habilidad y con numerosas dádivas un estado de opinión favorable a los cabildos. El Papa, discutiendo con el secretario Montesa la renovación del pago

<sup>16</sup> CERECEDA, F., «El litigio...», *op. cit.* pp. 217-221.

<sup>17</sup> AGS, E, 881, fol. 46.

<sup>18</sup> MARIN MARTÍNEZ, T., «Primeras...», *op. cit.* pp. 325-349.

<sup>19</sup> LÓPEZ MARTÍNEZ, N., «El cardenal...», *op. cit.*, p. 76; GONZ, J., *Historia...*, *op. cit.*, III, pp. 460-464; GIL SANJUAN, J., «Lucha...», *op. cit.*, pp. 285-286 y 289; GUTIERREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, pp. 25-60.

<sup>20</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 256. Sobre la rivalidad entre ambos ministros, miembros de facciones diferentes, MARTÍNEZ MILLÁN, J., y DE CARLOS MORALES, C. J., *Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispánica*, Valladolid, 1998, pp. 61-65.

<sup>21</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 215. Algunos episodios de esta visita son narrados en CAREZA, A., *La vida en una catedral del Antiguo Régimen*, Palencia, 1997, pp. 62-68.

del subsidio, afirma «que estaba la clerecía de España tan atribulada y desasosegada por lo que hacían los obispos con los cabildos por el decreto del concilio de Trento que no les daría más aflicción con los medios frutos»<sup>22</sup>.

El 30 de agosto de 1554, Julio III firma dos importantes breves. En el más conocido, *Ex credita nobis*, deroga todo lo hecho por los obispos contra los cabildos y les ordena liberar a los prisioneros y no obedecer las directrices regias sobre el asunto, puesto que atentan contra la libertad eclesiástica y la autoridad de la Santa Sede<sup>23</sup>. Por la misma razón, el Papa ordena suspender toda acción contra los cabildos hasta la publicación de una gran bula de reforma que una junta creada por él está redactando. Según Castrillo, el borrador de esta bula mantiene la exención de los cabildos que eran exentos desde su fundación o desde tiempo inmemorial y se pronuncia a favor de las pretensiones de los capitulares hispanos. Como recuerdan los cabildos, Julio III había presidido como legado papal, cuando era el cardenal Del Monte, las sesiones de la primera etapa del concilio de Trento. Ya entonces había defendido claramente que el canon de 1547 no autorizaba a los obispos a visitar los cabildos que gozasen de exenciones de esos tipos<sup>24</sup>.

Menos conocido es el segundo breve, *Non potuimus*, ya que de él parece que no han llegado copias a los archivos capitulares<sup>25</sup>. En éste, dirigido al Consejo de Castilla, Julio III se admira de que expertos juristas como ellos hayan actuado contra los mandatos pontificios, impidiendo que tengan vigor los documentos emanados de la Rota romana sobre la interpretación del concilio. Formula su deseo de que los jueces y consejos regios vuelvan a la obediencia de la Santa Sede y al respeto de la libertad eclesiástica y les da cuatro meses para revocar sus decisiones pasadas. De lo contrario, les avisa de que incurrirán en las penas previstas contra quienes no obedecen al Papa. El nuncio, que recibe los dos breves, acepta no hacer público este último a cambio de que el Consejo se comprometa a exponer sus razones al Pontífice.

A pesar de las órdenes y de las promesas papales, Carlos V se niega a revocar sus órdenes. Pero el *Ex credita nobis*, del que Castrillo ha enviado muchas copias, circula ya por la Corona<sup>26</sup>. Los canónigos de Burgos que lo han publicado son arrestados por la justicia real. Los de Zamora, que han hecho lo mismo, son desterrados. El Consejo de Castilla ordena una vez más a todos los obispos y cabildos que se ponga en ejecución el concilio de Trento y envía alcaldes de la Casa y Corte a diversas ciudades a verificar que así se hace. Cualquier bula o documento que venga de Roma no debe ser publicado

<sup>22</sup> AGS, E, 881, fol. 48.

<sup>23</sup> Copias del breve en AGS, PR, 21, núm. 79; E., leg. 103, fols. 320 y 104, fol. 54. Según el secretario Montesa estas duras decisiones todavía pueden darse por buenas, pues al principio el Papa «estaba deliberado de hacer llamar personalmente a Roma a todos los perlados de España», AGS, E., leg. 881, fol. 49.

<sup>24</sup> GOÑI GAZTAMBIDE, J., «Los cabildos...», *op. cit.*, p. 430.

<sup>25</sup> Pero sí hay alguna referencia en el archivo capitular de Burgos, a tenor de lo que escribe SERRANO, L., «Anotación...», *op. cit.*, p. 302. Una copia no autenticada del breve en AGS, E., leg. 103, fol. 321.

<sup>26</sup> GIL SANJUAN, J., «Lucha...», *op. cit.*, p. 290.

ni puesto en ejecución, sino enviado por su destinatario al Consejo para que éste lo examine y decida lo más conveniente. El presidente del Consejo, Antonio de Fonseca, el mismo obispo de Pamplona desde 1545 hasta su renuncia en 1550, escribe con amargura el 19 de octubre de 1554:

Como por nuestros pecados seamos venidos en tiempo que para defender la iglesia se ha de pelear contra ella, yo quisiera cierto que esta guerra se hubiera hecho con buena maña y artificio, que son las armas con que de Roma nos las hacen en todos los negocios <sup>27</sup>

El Consejo de Castilla ignora, pues, el breve del Papa y afirma que cuando Julio III sea mejor informado, él mismo anulará su breve. Varios obispos secundan la actitud del Consejo y apelan contra el breve «del Papa mal informado al Papa mejor informado». Amparándose en el favor regio, algunos prelados, como el de Calahorra, intentan proseguir las visitas, enfrentándose de nuevo a la resistencia tenaz de los cabildos <sup>28</sup>. Pero en un nuevo breve, el 11 de noviembre de 1554, Julio III declara absueltos de todas las penas a los capitulares perseguidos, a pesar de lo cual Carlos V se mantiene firme en sus principios <sup>29</sup>.

A principios de 1555, el Papa envía a Inglaterra, donde está Felipe, al auditor de la Rota, Antonio Agustín, para encontrar un acuerdo. Agustín va a Londres a presentar los parabienes del Papa a los nuevos reyes, María y Felipe, por su matrimonio y por el restablecimiento del catolicismo en Inglaterra. Al pasar por los Países Bajos, debe también entrevistarse con Carlos V. Tiene instrucciones para mostrarles el texto de la gran bula de reforma anunciada por Julio III y recabar su parecer sobre ella, lo que incluye, entre otros asuntos, buscar una solución al conflicto causado por la aplicación del concilio de Trento a los cabildos <sup>30</sup>.

La elección del aragonés Agustín es muy atinada: es un prestigioso jurista, formado en la universidad de Bolonia, que sirve en la Rota romana desde 1544. Pero es también hijo de un vicescanciller de la Corona de Aragón, hermano del obispo de Huesca y de un difunto *batlle general* (encargado de las finanzas regias) en Cataluña. El embajador en Roma le ha recomendado en varias ocasiones para mercedes reales <sup>31</sup>. Es, por lo tanto, un hombre que inspira confianza tanto a los ministros del Rey como a los curiales.

<sup>27</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 315. La consulta del consejo en fols. 316 y 345; véase también fol. 322.

<sup>28</sup> CERECEDA, F., «La interpretación...», *op. cit.*, pp. 429-449; GIL SANJUAN, J., «Lucha...», *op. cit.*, pp. 292-294; MARIN MARTÍNEZ, T., «Primeras...», *op. cit.*, pp. 343-347; GOÑI GAZTAMBIDE, J., *Historia...*, *op. cit.*, III, pp. 468-469.

<sup>29</sup> GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, pp. 68-75.

<sup>30</sup> AGS, E., leg. 882, fol. 2. Sobre esta legación: KAMEN, H., «Antonio Agustín y la presencia española en Inglaterra, 1555», *Jornades d'Història Antoni Agustín (1517-1586) i el seu temps*, Tarragona, 1986, I, pp. 153-154; CLOSA FARRÉS, J., «El legado de Inglaterra en la obra de Antonio Agustín», *ibid.*, tomo II, pp. 151-169; GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, pp. 87-95 y 572-576. Sobre la relación de Felipe con Julio III, TELLECHEA IDÍGORAS, J. L., «Philippo. Angliae Regi Illustri. Defensori Fidei», en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (ed.) *Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica*, Madrid, 1998, I-2, pp. 905-921.

<sup>31</sup> Por ejemplo, AGS, E., leg. 881, fol. 9. Sobre los orígenes familiares de Agustín, MOLAS I RIBALTA, P., *Catalunya i la Casa d'Àustria*, Barcelona, 1996, pp. 74-77 y 81-82.

El anuncio de la legación de Agustín sirve para distender la situación. El Consejo de Castilla ordena liberar a los canónigos de Burgos y de Zamora que estaban detenidos. Con gran habilidad, el legado llega a un compromiso: mientras el Papa no haya zanjado definitivamente el problema en su bula, ningún obispo podrá realizar la visita si no es acompañado de dos adjuntos miembros del cabildo, uno designado por el obispo y el otro por el propio cabildo. Pero en ese momento no ha llegado aún a Inglaterra la noticia de la muerte de Julio III, fallecido el 23 de marzo de 1555 sin haber promulgado la bula de reforma. Según el Derecho canónico, el óbito del Papa deja automáticamente en suspenso la legación de Agustín e invalida todos los acuerdos a que haya podido llegar.

Tras el fugaz pontificado de Marcelo II, en abril de 1555, la elección de Paulo IV impone un cambio de dirección. El Papa está decidido a asentar el poder de la Santa Sede frente a cualquier instancia episcopal, real o conciliar. Paulo IV quiere una reforma de tipo autoritario, dirigida exclusivamente desde Roma. Por eso, ignora las decisiones tridentinas, que considera ineficaces y de inspiración conciliarista. La actitud de los obispos hispanos, que ignoran las cartas inhibitorias de la Rota y se amparan tras el Consejo Real es percibida por el nuevo pontífice como la mayor injuria que se puede cometer contra su concepto de la autoridad papal.

Además, los agentes de los cabildos pueden ahora acceder más fácilmente al Papa. El datario, Giovanni Battista Osio, es el abogado del influyente cabildo de Burgos en sus procesos en Roma. El hombre de confianza del cardenal Serracino, sobrino del Papa, es el jurista Ercole Severoli, antiguo miembro de la Junta de Reforma de Julio III y autor de varios memoriales a favor de los cabildos. En fin, el canónigo Castrillo tiene, por orden expresa de Paulo IV, libre acceso a los aposentos papales a cualquier hora. Dadas estas premisas, no sorprende que el Papa se haya mostrado especialmente receptivo ante las peticiones de los canónigos. Dice a Castrillo que ya había tenido conocimiento de la importancia de los cabildos durante su estancia en Castilla, en tiempos de los Reyes Católicos, y que, siendo cardenal, había protestado ante los papas contra las ofensas que los obispos les infligían <sup>32</sup>.

Los cabildos castellanos aprovechan la predisposición del nuevo Papa y la reunión de los procuradores de sus iglesias en Valladolid, destinada a discutir sobre el pago del subsidio, para tratar del daño que reciben por la ejecución del concilio. Deciden recurrir a Roma contra la interpretación que los obispos realizan por su cuenta de algunos puntos confusos del concilio. Denuncian que muchos canónigos han sido encarcelados, juzgados por tribunales laicos, obligados a renunciar a la inmunidad eclesiástica y forzados a incumplir los mandatos del Papa. Envían a Castrillo una lista de los decretos del concilio que deberían ser revocados o modificados.

<sup>32</sup> SERRANO, L., «Anotación...», *op. cit.*, pp. 309-311; GONÍ GAZTAMBIDE, J., *Historia...*, *op. cit.*, III, pp. 465-466, 472 y 475-477.



Paulo IV asume la defensa de los cabildos. Al principio de su pontificado expide dos breves en los que exhorta al presidente del Consejo de Castilla, Antonio de Fonseca, a ayudar a los cabildos y ordena al nuncio procurar la liberación de los canónigos arrestados en Astorga, León, Pamplona y Zamora. Luego Castrillo obtiene el breve *In supremo iustitia*, firmado el 30 de octubre de 1555<sup>33</sup>, a pesar de la oposición de cardenales residentes en Roma como Mendoza, obispo de Burgos, y Álvarez de Toledo, arzobispo de Santiago. Paulo IV ordena que cese toda actuación de los obispos contra el clero capitular hasta que la Santa Sede se haya pronunciado definitivamente sobre la vigencia de los decretos tridentinos. Si los prelados no obedecen, el Papa pronunciará graves penas contra ellos por su desprecio hacia la autoridad apostólica. Además, Paulo IV ordena al obispo de Calahorra, cuya actitud le ha enojado especialmente, que comparezca en Roma para dar cuenta de su actitud<sup>34</sup>.

El Consejo de Castilla recibe el breve con gran contrariedad. Castrillo, que trae las copias, es detenido en la frontera en enero de 1556. En febrero es liberado, pero sus documentos son confiscados<sup>35</sup>. Los obispos intentan sin éxito exponer al Papa sus ideas sobre el tema<sup>36</sup>. La publicación del breve genera nuevas detenciones y destierros en León, Segovia, Calahorra y Santo Domingo de la Calzada<sup>37</sup>. En Roma, el canónigo de Burgos, Gregorio de Ayala, se encarga de gestionar los intereses de los cabildos en sustitución de Castrillo<sup>38</sup>.

Por otra parte, el conflicto se ve agravado por dos factores. En primer lugar, la política pro-francesa de Paulo IV en el momento en que, tras la abdicación de Carlos V, la Monarquía Hispánica está viviendo momentos de tensión derivados de la transmisión de poderes. En segundo lugar, la reticencia del Papa a renovar la concesión del subsidio, con cuyo importe el fisco real dice contar para sufragar los gastos de una expedición militar contra Bujía<sup>39</sup>. En marzo de 1556, el comisario general de la cruzada y obispo de Lugo, Suárez de Carvajal, tras haber constatado el bloqueo de las negociaciones en Roma, ordena por su cuenta que los agentes encargados de la recaudación del subsidio procedan a ingresar cantidades idénticas a las de los años precedentes, pero los cabildos

<sup>33</sup> Copias en AGS, E., leg. 883, fol. 3, y PR, 21, núm. 80.

<sup>34</sup> Pero el 15 de febrero de 1556, vista la respuesta sumisa de Luco, el Papa le perdona la sanción previo juramento de someterse a los mandatos apostólicos. El obispo muere el 6 de septiembre de 1556. GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, op. cit., p. 56.

<sup>35</sup> AGS, E., leg. 112, fol. 234; véase también fol. 86.

<sup>36</sup> Véase la carta del arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, resumida en GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, op. cit., pp. 123-124. El obispo de Cartagena, Esteban de Almeyda, solicita incluso la mediación ante el Papa de Ignacio de Loyola, CERECEDA, F., «El litigio...», op. cit., p. 226.

<sup>37</sup> GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, op. cit., pp. 113-116.

<sup>38</sup> Sobre sus gestiones, GONÍ GAZTAMBIDE, J., *Historia...*, op. cit., III, pp. 478-482.

<sup>39</sup> Téngase en cuenta, empero, que en septiembre de 1554 la Princesa Gobernadora advertía a Carlos V que todo lo que se podía sacar del subsidio durante el siguiente trienio estaba ya «consumido y librado», antes incluso de que Julio III concediese la bula, AGS, E., leg. 103, fols. 236-246. En general, RODRÍGUEZ-SALGADO, M. J., *Un Imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su mundo, 1551-1559*, Barcelona, 1992.

sabotean la cobranza. El presidente Fonseca reconoce la dificultad de la situación «porque las iglesias están muy favorecidas del Papa y han caído en la cuenta de su condición y así cualquiera queja que allá vaya le indignará, según dicen que es menester poco (para indignarle)»<sup>40</sup>.

Y, en efecto, el Papa reacciona con indignación. Por una parte, en el verano de 1556 promulga un breve dirigido al nuncio en el que insiste sobre la exención jurisdiccional de los cabildos<sup>41</sup>. Por otra parte, en breves dirigidos al arzobispo de Toledo, el cardenal Martínez Silíceo deroga el subsidio y la cruzada y ordena devolver a los cabildos las propiedades incautadas. Además, manda comparecer en Roma para explicar su actuación, al obispo de Lugo, Suárez de Carvajal, y al obispo dimisionario de Canarias, Melchor Cano, de quien se decía que en un informe había negado el poder del Papa de revocar las gracias fiscales<sup>42</sup>.

El estallido de la guerra entre Felipe II y Paulo IV paraliza las negociaciones. La victoria de las tropas del duque de Alba obliga al Papa a recomponer sus relaciones con Felipe II tras la firma de la paz en septiembre de 1557. Los cabildos aceptan entonces pagar el subsidio. Pero el problema de la jurisdicción episcopal persiste. Tras la guerra, Paulo IV promulga diversas medidas de reforma, pero no osa precisar la situación de los cabildos. Según Serrano, también los obispos se muestran más moderados, suspendiendo temporalmente sus actuaciones contra el clero capitular<sup>43</sup>, aunque en algún cabildo el obispo insiste en su derecho de visita<sup>44</sup>.

En julio de 1559, Felipe II ordena de nuevo aplicar los decretos del concilio de Trento por «lo mucho que importa al servicio de Dios y a la corrección y disciplina y quietud del estado eclesiástico y aun a la paz y sosiego público». Sin embargo, el Rey también ha moderado su posición sobre este punto: antes de enviar las órdenes a los ministros regios para que ayuden a los obispos, Felipe II ordena esperar la autorización del Papa<sup>45</sup>. El problema reaparecerá en el siguiente pontificado, cuando Pío IV decida concluir el concilio de Trento.

<sup>40</sup> AGS, E., leg. 112, fol. 252; véanse también 114, fol. 103, y 120, fols. 78-83.

<sup>41</sup> SERRANO, L., «Anotación...», *op. cit.*, pp. 314-315; GONÍ GAZTAMBIDE, J., *Historia...*, *op. cit.*, pp. 481-482; GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, pp. 128-130.

<sup>42</sup> AGS, E., leg. 112, fols. 123, 141 y 246; 114, fols. 134, 176 y 188; 883, fols. 18-22, 33-35 y 39. La justificación de Cano en E, 130, fol. 154. En general, véase CERECEDA, F., «El litigio...», *op. cit.*, pp. 229-232. Sobre cómo se vivió el conflicto en el cabildo de Málaga, GONZÁLEZ SÁNCHEZ, V., «Las tensas relaciones entre el papa Paulo IV y la monarquía española, y la angustia para la conciencia de muchos españoles (1555-1559)», en PEREIRA IGLESIAS, J. L., y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M., *Felipe II y su tiempo*, Cádiz, 1999.

<sup>43</sup> SERRANO, L., «Anotación...», *op. cit.*, p. 324.

<sup>44</sup> Por ejemplo, en Burgos, LÓPEZ MARTÍNEZ, N., «El cardenal...», *op. cit.*, pp. 83-85.

<sup>45</sup> AGS, E., leg. 146, fol. 210.

## Los ejes del conflicto

En todo este conflicto diversos motivos de discordia aparecen entremezclados, aunque, procediendo analíticamente, podemos diferenciarlos. La causa más inmediata de la discordia es, obviamente, la definición del poder de los obispos sobre los cabildos. El argumento más repetido por los obispos y por el Consejo es que «el gobierno y reformación, la quietud y el sosiego del estado eclesiástico» depende de la observación del decreto tridentino sobre los cabildos. Los prelados denuncian que si el castigo de los delitos del clero capitular queda exclusivamente en manos de los cabildos, nunca se conseguirá elevar su nivel moral e intelectual. Además, los obispos no podrían ejercer la autoridad que de derecho divino y humano les corresponde, ni siquiera residir, puesto que la debilidad de su posición quedaría en evidencia ante todo el pueblo <sup>46</sup>.

Para los cabildos, en cambio, su autonomía sirve para contrapesar el poder excesivo del episcopado. Se amparan en la tradición, dado que la mayoría son exentos desde su fundación, y en el derecho a la defensa, puesto que al no dejarles presentarse en Trento han quedado inermes ante las pretensiones abusivas de los prelados. Por eso acuden al Papa rogando, según ellos mismos exponen, que se interprete el concilio e incluso se modifique para que

los perlados de estos reinos no queden tan señores absolutos como pretendieron en el dicho concilio y de presente pretenden en gran perjuicio y disminución de la Sede Apostólica y subjección y vergüenza de todo el estado eclesiástico de estos reinos, no quedándonos libertad para hacer lo que por Su Santidad y la Sede Apostólica nos fuere mandado ni para contradecir y resistir a lo que por los dichos perlados fuere injustamente procurado <sup>47</sup>.

Los capitulares han comprendido bien que su disputa con los prelados no es un mero debate teórico, sino que se produce en un contexto muy concreto, el del concilio de Trento. La convocatoria y el desarrollo del concilio han suscitado muchas esperanzas pero también muchos temores entre los diferentes sectores eclesiásticos. De ahí su extrema complejidad.

La Santa Sede teme que el concilio sea la ocasión para reeditar las tesis conciliaristas bajo-medievales o para desarrollar nuevas ideas de tipo episcopalista que propugnen un poder mayor y más autónomo de cada obispo en su diócesis. La actitud de los obispos hispanos en Trento, reclamando con insistencia que sus facultades sean claramente definidas, exacerba los temores de la Curia. Y, tras la vuelta de los prelados a Castilla, no faltan informes en Roma, como los del jesuita Luis de Mendoza, en

<sup>46</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 319. Ésta es una de las excusas que pone el arzobispo de Sevilla, Valdés, para no residir: AGS, E., leg. 128, fol. 392.

<sup>47</sup> Citado por GOÑI GAZTAMBIDE, J., «Los cabildos...», *op. cit.*, p. 452.

los que se les acusa de reunirse con el beneplácito real para, so pretexto de corregir a los canónigos, «hacer monipodio contra el papa y la autoridad de la sede apostólica»<sup>48</sup>.

En el período que estudiamos, esta preocupación romana se centra en dos puntos. El primero consiste en establecer que los decretos tridentinos no son válidos sin la confirmación pontificia. En la práctica, eso supone establecer la superioridad del Papa sobre el concilio. Paulo IV, que aunque en lo moral es un reformista, en lo eclesiológico es un decidido defensor del absolutismo pontificio, se lo expone claramente a Gregorio de Ayala: «que el concilio Tridentino no lo era porque le faltaba la tercera solemnidad, que era la aprobación del Sumo Pontífice»<sup>49</sup>. Por el contrario, la pretensión de que los decretos de un concilio legítimamente convocado por el Papa están inspirados por el Espíritu Santo y, por consiguiente, son válidos desde el mismo momento en que son aprobados, supone eliminar cualquier poder de supervisión pontificia y dejar al Papa vinculado a aquello que la asamblea conciliar haya decidido.

El segundo punto consiste en afirmar que, en caso de duda, es el Papado quien debe establecer el sentido en que los decretos tridentinos deben ser interpretados. Obviamente, este poder aseguraría a la Curia que la aplicación del concilio se hiciese respetando sus criterios y sin menoscabo de su poder.

El secretario de la embajada en Roma comprende claramente el núcleo de la argumentación papal y se lo expone a Felipe en una carta de 24 de agosto de 1554. De lo que se queja Julio III en sus conversaciones con Hernando de Montesa es de que se ha puesto el concilio de Trento en ejecución antes de aprobarlo él. El Papa afirma que no quiere ir contra el concilio «sino dar la declaración de cómo se ha de entender, que en esto ninguno otro ha de ser juez sino Su Santidad». Lo que más le duele es que el Consejo de Castilla haya ordenado que no se usen las bulas y letras apostólicas sin presentarlas antes a los consejeros:

Esto es lo que el papa no puede sufrir, porque dice que el consejo quiere ser juez sobre Su Santidad para ver si pudo derogar o no el concilio, y que aquí entraremos en la disputa si el papa es sobre el concilio o el concilio sobre el papa, que él no quiere juez de lo que hiciere sino a Dios, cuyo vicario es y de quien tiene las veces y suma potestad<sup>50</sup>.

Desde este punto de vista, los cabildos se revelan como habilísimos litigantes. No se presentan como los mantenedores de anacrónicos privilegios medievales que de hecho les garantizan impunidad, según denuncian los obispos, sino como defensores de la autoridad de la Santa Sede ante quienes quieren cercenarla, como los prelados y los

<sup>48</sup> Citado por CERECEDA, F., «El litigio...», *op. cit.*, pp. 217-218. Mendoza advierte de que, si no se toman prontas medidas en favor de la Santa Sede, «los obispos se convertirán papas», *ibid.*, p. 221.

<sup>49</sup> Citado por SERRANO, L., «Anotación...», *op. cit.*, p. 314. Ayala, lúcidamente, anota: «dudo venga Pontífice que tanto odio tenga con lo hecho en el concilio Tridentino como el que ahora es», *ibid.*, p. 315.

<sup>50</sup> AGS, E., leg. 881, fol. 49.

consejeros del Rey. Ante las denuncias de delitos cometidos por los canónigos que los obispos presentan en Roma, Castrillo responde sistemáticamente «que nosotros no pretendemos no ser castigados, sino la forma de cómo ha de ser»<sup>51</sup>.

Así, la congregación de procuradores de los cabildos reunida en Valladolid en mayo de 1554 escribe a Castrillo: «La solicitud de los prelados es, no residir en sus iglesias y hacer su oficio, sino de ser señores y que apelación nunca acá (Roma) llegue, ni inhibitoria nos valga»<sup>52</sup>. Y en 1555, al felicitar a Paulo IV por su coronación, le advierten de que su litigio no trata «de cosas leves y ligeras, sino de cosas gravísimas y sumamente serias, a saber, de la libertad eclesiástica, de la autoridad de la Sede Apostólica, de la obediencia a sus sagradas sanciones, de la plena y perfecta obediencia de la misma Sede»<sup>53</sup>.

Incluso Gregorio de Ayala, persona más prudente que Castrillo, comprende que son los obispos los que se han equivocado de estrategia ante el reformador Paulo IV:

Si los prelados hubieran obedecido y mostrado que lo que hacían era por reducir a los eclesiásticos a mejor orden de vivir y para que no [...] fuesen tan sueltos en el pecar, sin duda ninguna Su Santidad les hubiera dado amplísima autoridad y poder, sin tener respecto a exención inmemorable ni a privilegios<sup>54</sup>.

Si Carlos V adopta una actitud tan firme, ordenando incluso que no tengan aplicación las órdenes del Papa, es porque también para él las implicaciones políticas del asunto son claras. El Emperador justifica su actuación en que el decreto de suspensión del concilio de 1552 exhorta a los soberanos a poner en ejecución lo aprobado. Y, una vez el Rey, en aplicación de ese decreto, ha ordenado que los cánones conciliares sean aplicados en sus reinos, cualquier gestión en Roma de sus súbditos en pro de una revocación o de una suspensión supone un desacato intolerable. Para la Santa Sede, en cambio, nadie puede ser perseguido por haber acudido al juez competente en una materia o por haber intentado aplicar sus decisiones, máxime tratándose de eclesiásticos que apelan al Sumo Pontífice.

Pero más allá de este aspecto concreto, hay una cuestión que preocupa más al Emperador: el control sobre la Iglesia de sus reinos que la Corona está afianzando desde tiempos de los Reyes Católicos puede verse en entredicho si las decisiones sobre aspectos tan importantes como los tratados en el concilio quedan en manos de Roma sin intervención posible del Rey. Por eso, el príncipe Felipe explica al embajador en Roma, Juan Manrique de Lara, que al Rey incumbe

<sup>51</sup> Citado por GIL SANJUÁN, J., «Lucha...», *op. cit.*, p. 294.

<sup>52</sup> Citado por GIL SANJUÁN, J., «Lucha...», *op. cit.*, p. 289.

<sup>53</sup> Citado por GOÑI GAZTAMBIDE, J., *Historia...*, *op. cit.*, III, p. 474.

<sup>54</sup> Citado por GOÑI GAZTAMBIDE, J., «Los cabildos...», *op. cit.*, p. 439.

la guarda y observancia del dicho concilio de Trento, porque como Su Santidad bien sabe el dicho concilio se convocó a instancia de Su Majestad y se juntó y continuó debajo de su protección y amparo con grandes trabajos y gastos suyos y de sus naturales <sup>55</sup>.

Un factor complica aún más las cosas. Aún está reciente la concesión del derecho de presentación de los obispos a Carlos V. Las reticencias que la decisión de Adriano VI en 1523 habían generado en la Curia hicieron que el Emperador buscara ratificaciones papales, lo que explica las confirmaciones de Clemente VII en 1530 y 1531 y de Paulo III en 1536 <sup>56</sup>. Gracias a estas concesiones pontificias, la Corona controla en exclusiva el nombramiento de los obispos y, por lo tanto, tiene garantizada la cooperación política del episcopado. Vista desde Roma, la inferencia es clara: si los obispos consiguen imponer sus pretensiones episcopalistas y hacerse con el dominio sobre los cabildos, que actúan como líderes del clero diocesano, en el fondo será la Corona la que se hará con el control de todo el clero secular y podrá eludir *de facto* las decisiones de la Santa Sede. El apoyo sistemático que los agentes del Rey prestan a los obispos para realizar las visitas o detener a los capitulares ratifica las sospechas de la Curia.

En definitiva, para el Papa y para el Emperador, el conflicto entre los cabildos y los obispos no es tanto un conflicto sobre la moralidad del clero como, ante todo, sobre el ejercicio de la jurisdicción —y, por ende, del poder— en la Iglesia. Así, cuando Julio III amenaza con excomulgar al Consejo de Castilla y ordena a los consejeros que respeten las libertades eclesiásticas, el Consejo responde airado que es «cosa nueva y, ya que se diese lugar, sería tocar en la (autoridad) Suprema de Vuestra Majestad e impedir la administración de la justicia de estos reinos» <sup>57</sup>.

Por eso, entre los motivos de desavenencia entre el Papado y la Corona a propósito del litigio de los cabildos, se incluyen también los desacuerdos sobre los medios que cada cual utiliza para afirmar su poder. Los papas protestan abiertamente contra el *exequatur* regio, esto es, el derecho que el Consejo de Castilla se arroga de retener las bulas, breves, inhibitorias y citaciones pontificias y de impedir que surtan efecto. De nuevo es Montesa quien advierte de que Julio III quiere revocar «la pragmática que ellos llaman de llevar al consejo las bulas y rescriptos que van de Roma para que vean si se han de observar o no, porque dice es una especie de cisma» <sup>58</sup>. El Consejo de Castilla, por su parte, se queja de la actuación del nuncio Marini, al que acusa de extralimitarse en sus competencias y de incitar a la desobediencia a los cabildos <sup>59</sup>.

<sup>55</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 318.

<sup>56</sup> HERMANN, C., *L'Église d'Espagne sous le Patronage Royal (1476-1834)*, Madrid, 1988, p. 46.

<sup>57</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 316.

<sup>58</sup> AGS, E., leg. 881, fol. 46. De hecho, éste es el principal tema del breve de 30 de agosto de 1554 contra el Consejo.

<sup>59</sup> AGS, E., leg. 103, fol. 316. En 1559 el Consejo quiere incluso nombrar un asesor castellano al nuevo nuncio, Salvatore Pascino, para que, so pretexto de aconsejarle sobre los usos y costumbres jurídicas del reino, controle su actuación, AGS, E., leg. 146, fol. 210.

La discusión debe ponerse en relación con el poder creciente que los nuncios van adquiriendo a lo largo del siglo XVI<sup>60</sup>.

## Los pareceres de los letrados

Uno de los argumentos que utilizan los obispos y los consejeros en su correspondencia en contra de los cabildos es que cuentan con el parecer de letrados que respaldan su actuación. Ya el 9 de marzo de 1554 lo escribe así el príncipe Felipe al embajador en Roma, para que disuada a Julio III de proseguir con sus pretensiones<sup>61</sup>. Como es lógico, cuando el problema se complica con la promulgación por la Santa Sede de diversos breves, las consultas a letrados expertos se hacen todavía más formales.

Se encuentran en Simancas los textos de cinco de esas consultas, más la referencia a otras que se han perdido. Conservamos los dictámenes de Juan de Muñatones, Andrés Cuesta, Domingo de Soto, Melchor Cano y Martín de Azpilcueta<sup>62</sup>. Estos textos plantean algunos problemas de crítica textual, tanto más cuanto que sólo en un caso, el memorial de Andrés Cuesta, se conserva el texto original. Los demás se perdieron en un incendio que tuvo lugar en 1939 en la universidad de Valladolid, donde se encontraban depositados. En el Archivo General de Simancas quedaron tan sólo copias<sup>63</sup>. Por otra parte, algunos de estos textos no aparecen bien fechados en el catálogo de la serie correspondiente. El hecho de que no estuviesen datados y de que se refiriesen a la aplicación del concilio de Trento hizo suponer a sus catalogadores que debían ser posteriores a la conclusión del concilio, en diciembre de 1563<sup>64</sup>. El error ha pasado también a algunas monografías.

Es imposible precisar las fechas de los dictámenes con total exactitud, pero se puede afirmar que todos, salvo el de Azpilcueta, fueron escritos entre 1554 y 1555. Muñatones se refiere a los breves papales sin precisar a cuáles, pero afirma que aún no ha concluido el concilio ni se ha celebrado la sesión final. Cuesta declara haber visto los dos breves

<sup>60</sup> Hay que reconocer, sin embargo, que el obispo de Laodicea supo nadar y guardar la ropa. Por un lado, mantuvo una relación fluida con el príncipe Felipe y la Princesa Gobernadora, atendiendo incluso algunas de sus peticiones y exponiendo sus razones ante la Curia, AGS, E., leg. 103, fol. 137; 108, fol. 74. Por otro lado, los cabildos estaban al corriente de todas las gestiones del nuncio, cuyos despachos a Roma eran enviados a través del cabildo de Burgos, GIL SANJUÁN, J., «Lucha...», *op. cit.*, pp. 288 y 291.

<sup>61</sup> AGS, E., leg. 103, fols. 318 y 319.

<sup>62</sup> Entre los textos perdidos está el de Francisco Blanco y, posiblemente, los de Andrés Pérez, Alonso Díez y Gaspar de Zúñiga; sobre éstos y sobre la posible datación, GUTIÉRREZ, C., *Trento...*, *op. cit.*, pp. 76-77 y 121.

<sup>63</sup> Pueden consultarse en Simancas en las copias manuscritas que hay en lugar de los originales o en un libro mecanografiado titulado «Copias de documentos. Patronato Real, legajo 21», con la signatura R. IV-3-16. Agradezco muy particularmente a la señora Isabel Aguirre, archivera de Simancas, los datos que me ha facilitado sobre esta cuestión.

<sup>64</sup> AGS, *Catálogo V Patronato Real (834-1851)*, Valladolid, 1946, I, pp. 292, 293 y 305.

de Julio III de 30 de agosto de 1554 y dos cédulas reales dirigidas a los obispos de Pamplona y de Palencia, así como las provisiones a los agentes de la justicia real en Pamplona. Melchor Cano se refiere también a estas cédulas, así como a los decretos tridentinos de 1547 y 1552 y al *Ex credita nobis*. Según Goñi, las cédulas del Consejo enviadas a Pamplona, que sirvieron de modelo para las de los demás obispados, están firmadas a 8 de noviembre de 1554. En diciembre, la Princesa reiteró estas órdenes<sup>65</sup>. En cambio, ninguno de estos autores hace referencia al breve definitivo de Paulo IV, de 30 de octubre de 1555. Cabe suponer, pues, que estos textos fueron escritos entre noviembre de 1554 y octubre de 1555. Sólo la opinión de Domingo de Soto, como veremos, pudo ser redactada antes de esa fecha.

A mayor abundamiento, digamos que, en enero de 1555, el nuncio Marini, sabedor de que el Consejo se ha dirigido a ellos, se entrevista con Soto y con Cano para exponerles su punto de vista sobre el conflicto que enfrenta a obispos y cabildos<sup>66</sup>. Además, Muñatones es nombrado obispo de Segorbe-Albarracín el 12 de julio de 1556 y Cuesta obispo de León el 10 de diciembre de 1557, pero ni en los textos ni en la firma se hace alusión alguna a su condición episcopal, lo que permite conjeturar que su redacción es anterior quizás incluso a la presentación por el Monarca.

En fin, el texto de Martín de Azpilcueta es claramente posterior, pues en él se cita ya el breve de Paulo IV de 30 de octubre de 1555. Azpilcueta es profesor de la universidad de Coimbra desde 1537 hasta su jubilación en 1555. Vuelve entonces a Navarra para ocuparse de asuntos familiares, pero consta que en su viaje se detiene un tiempo en Valladolid, donde se entrevista con el arzobispo Valdés y con la Princesa Gobernadora, que intentan retenerle en la Corte con varios encargos. En febrero de 1556 realiza otra estancia en Valladolid<sup>67</sup>. Suponemos que es por entonces cuando formula su opinión.

En todo caso, habida cuenta de la problemática que plantean y de las referencias que hacen los letrados, está claro que los pareceres no son redactados a partir de diciembre de 1563, fecha de la conclusión del concilio de Trento. Cabe señalar que Domingo de Soto y Melchor Cano, autores de dos memoriales, mueren en 1560 y que Andrés Cuesta lo hace el 2 de mayo de 1564. En ninguno de los textos se mencionan los decretos de la tercera etapa del concilio de Trento, ni las disposiciones de Pío IV sobre su confirmación o interpretación. Se cita a menudo la exhortación conciliar de 1552 a los soberanos para que apliquen los decretos y no la de 1563, mucho más importante puesto que es la de la sesión conclusiva y afecta al conjunto de los decretos. En fin, las referencias al Emperador, a Felipe y a doña Juana no dejan lugar a dudas sobre su redacción durante el reinado de Carlos V, es decir, antes de enero de 1556.

<sup>65</sup> GOÑI GAZTAMBIDE, J., *Historia...*, op. cit., III, pp. 469-470.

<sup>66</sup> SERRANO, L., «Anotación...», op. cit., p. 304; GOÑI GAZTAMBIDE, J., *Historia...*, op. cit., III, p. 471.

<sup>67</sup> ARIGITA Y LASA, M., *El doctor navarro don Martín de Azpilcueta y sus obras. Estudio histórico-crítico*, Pamplona, 1895, pp. 135 y 207-211; GOÑI GAZTAMBIDE, J., *Historia...*, op. cit., III, p. 559.



*Juan de Muñatones*<sup>68</sup>

El teólogo fray Juan de Muñatones se declara tajantemente en contra de cualquier nueva actuación del Consejo. Muñatones (1502-1571), fraile agustino nacido en Briviesca (Burgos), es un hombre de confianza para la Corona tanto por sus relaciones familiares —es hermano de dos consejeros reales, Juan y Gracián Briviesca, de Muñatones— como por sus propias funciones: confesor de las infantas desde 1549 y preceptor del príncipe don Carlos entre 1552 y 1554.

Muñatones declara que tras los breves en los que el Papa se erige en juez del concilio, no se puede poner el de Trento en ejecución ni molestar a ningún eclesiástico si no cumple sus decretos. Puesto que el Papa se ha reservado la decisión, nadie, ni siquiera el Consejo, puede entrometerse. Tampoco se puede ejecutar el concilio si éste no ha sido clausurado y no se dispone de la bula papal ordenando su aplicación. «La declaración y explicación de todos los concilios» pertenece al Papa y, por lo tanto, éste puede suspender la aplicación de cualquier decreto o decidir la forma de ponerlo en práctica incluso cuando, como en este caso, su contenido parece claro. Aún más: dado que no se trata de una materia de fe, sino relativa a las buenas costumbres y al gobierno de la Iglesia, el Papa podría incluso dispensar su cumplimiento «no sólo declarándola, sino anulándola y mandando que se guarde lo contrario». Por consiguiente, tras la intimación de los breves el Consejo debe cesar en su empeño, so pena de incurrir en las penas previstas en la bula *In Coena Domini*, que sanciona a las autoridades seculares que interfieren en la jurisdicción eclesiástica.

*Andrés Cuesta*<sup>69</sup>

Menos claramente se pronuncia sobre la cuestión Andrés Cuesta. Nacido en Honoria de Valdearado (entonces diócesis de Osma) y doctor en Teología por las universidades de Sigüenza y de Alcalá de Henares, Cuesta es catedrático de esta última institución. Desde 1550, Cuesta es también canónigo de la colegiata de Alcalá, muy vinculada a la universidad. Además, en 1555, el mismo año en que redacta el parecer, es visitador por orden del Rey de dicho centro docente.

Para Cuesta está claro que llevar a la práctica las leyes del concilio o del Papa es competencia de las autoridades eclesiásticas, no de las seculares, que sólo pueden intervenir a petición de aquéllas. El texto de la exhortación hecha a los soberanos en 1552 «no da a los príncipes cristianos que ellos ejecuten el concilio absolutamente man-

<sup>68</sup> AGS, PR, 21, núm. 163 (2).

<sup>69</sup> AGS, PR, 21, núm. 173. El texto ha sido transcrito por CERECEDA, F., «La interpretación y confirmación pontificia del Concilio de Trento según algunos teólogos españoles», *El Concilio de Trento. Exposiciones e investigaciones por colaboradores de Razón y Fe*, Madrid, 1945, pp. 432-434.

dándolo y haciéndolo ejecutar a los perlados» como si fueran sus subordinados, «sino que, convocados y llamados, ayuden». Los príncipes pueden, según el mandato conciliar, exhortar y amonestar a los prelados para que guarden y hagan guardar el concilio, pero no mandárselo.

También en caso de duda sobre alguna ley eclesiástica, incluidas las constituciones conciliares, la determinación de su sentido depende del Papa y no de un poder secular. Si el Papa ordena que no se aplique un canon hasta que él lo haya interpretado, erraría cualquiera que se opusiese. Incluso cuando el contenido del decreto se tenga por meridianamente claro y por provechoso a la república, se debe suspender su cumplimiento si el Papa lo pide «por algunos buenos respetos».

Una vez hechas estas observaciones generales, Cuesta introduce una salvedad que cambia radicalmente el sentido de su dictamen. Si se tiene constancia, «como V. S. Exma. me dio a entender cuando de este negocio me dio parte», de que la suspensión de un decreto no ha sido hecha con buena intención, sino que el Papa actúa movido por sus intereses particulares o para eludir la aplicación de un decreto, los prelados no están obligados a obedecerle. En tal caso, pueden los príncipes cristianos exhortar a los prelados a no obedecer al Papa para salvaguardar el celo y la buena intención con que procedió el concilio. Los obispos pueden entonces desobedecer sin que ello suponga incurrir en excomunión ni causar un menoscabo de la autoridad apostólica, ya que ésta debe orientarse a edificar el bien de toda la Iglesia, no a destruirlo.

### *Domingo de Soto* <sup>70</sup>

Tampoco Domingo de Soto se pronuncia con claridad, limitándose a exponer las dos teorías posibles sobre el tema. Sin embargo, cabe preguntarse si lo que ha llegado hasta nosotros es el dictamen definitivo. El final abrupto del texto, sin un pronunciamiento claro, y la pérdida del original dejan en vilo este interrogante. El autor de la copia que se conserva en Simancas señaló que en la carpeta había la siguiente nota: «M.<sup>o</sup> Fray Domingo de Soto en decretos del concilio. De Fray Domingo de Soto para my solo». Sin embargo, no precisa quién pudo ser el autor de esta nota. El biógrafo de Soto, Vicente Beltrán de Heredia, piensa que la pudo escribir el Emperador, aunque no explica el porqué, y data este texto de 1554. En ese año, Soto, que es catedrático en la universidad de Salamanca, es convocado a la Corte vallisoletana en dos ocasiones, una en enero y la otra en diciembre, para tratar de diversos asuntos. Beltrán supone que este texto debe ser anterior al memorial de Melchor Cano por el hecho de que en él se habla sólo de la aplicación del concilio sin referirse en concreto al problema planteado por los cabildos <sup>71</sup>.

<sup>70</sup> AGS, PR, 21, núm. 161. Transcrito por BELTRÁN DE HEREDIA, V., *Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado*, Madrid, 1961, pp. 664-666.

<sup>71</sup> BELTRÁN DE HEREDIA, V., *op. cit.*, p. 344.

El dominico segoviano Domingo de Soto (1494-1560) era un teólogo de gran reputación, formado en Alcalá, París y Salamanca, y muy estimado de Carlos V. El Emperador le llevó consigo a la Dieta de Augsburgo, le nombró teólogo suyo en el concilio de Trento y le hizo su confesor en 1548, aunque Soto renunció al cargo en 1550.

En el tema que nos ocupa, para Soto existen dos opiniones distintas y ambas son probables. La primera es que los decretos del concilio no son firmes hasta que el Papa no los confirma. Ésta se basa en que la potestad pontificia de declarar artículos de fe es personal y no puede ser transferida a los legados del Papa en el concilio. Admitida esta tesis, la postura del Consejo no puede ser defendida. No se puede argüir ni siquiera que el Papa hace fuerza al no confirmar el concilio, puesto que si de él depende el confirmarlo, también debe depender de él juzgar si se debe o no se debe confirmar, «y por consiguiente ejecutar».

Pero también es probable la opinión de quienes piensan que los decretos del concilio legítimamente convocado y libremente desarrollado son válidos si tienen el *placet* de los legados papales. Según esta teoría, la determinación de los artículos de fe y de las leyes universales de la Iglesia compete a ambas autoridades, el pontífice y el concilio universal. Cuando el Papa junta el concilio, éste tiene la misma autoridad que el Papa, independientemente de si él se halla presente. Si todo lo que hace el concilio debiera depender de lo que el Papa quisiera confirmar, sería inútil convocarlo y los obispos no querrían ir. En fin, si se admite esta idea, es materia de fe que el Espíritu Santo asiste al concilio general para que éste no pueda errar y que, por lo tanto, sus decisiones no dependen de la aprobación pontificia. Pero esto se debe entender cuando no existen controversias sobre el contenido de los decretos, en cuyo caso debe recurrirse al Papa.

Soto dedica mucho más espacio a desarrollar esta segunda teoría que la primera, pero no incluye una frase en la que se pronuncie claramente por ella. Sin embargo, el historiador Feliciano Cereceda cita una carta de Soto al cabildo de Santiago de Compostela, aunque sin precisar su fecha, en la que el eminente teólogo se manifiesta con más claridad:

Yo allí dije y agora replico que *concilium legitime congregatum praesidentibus legatis apostolicis* tiene la misma autoridad que si el Papa presidiese, y por eso, no tiene necesidad de otra confirmación, pues que el decreto no se hizo *sub conditione*. Aunque en reconocimiento de la obediencia que como a cabeza se le debe, *de more fuit semper in ecclesia tu ipse suscriberet concilio* <sup>72</sup>.

<sup>72</sup> Citado por CERECEDA, F., «La interpretación...», *op. cit.*, p. 445.

Melchor Cano <sup>73</sup>

El texto que comentamos plantea un problema de autoría. El que estaba depositado en el archivo, que según el catálogo no era original sino una copia, se perdió en 1939. En Simancas se conservó una copia mecanoscrita, al final de la cual se indica que en la carpeta del documento ponía: «Del obispo Fray Melchor Cano y maestro Fray Domingo de Soto —Pareceres de Letrados sobre el concilio— Pareceres del Obispo Cano y Fray Domingo de Soto y el Doctor Blanco sobre el concilio». A falta del original, algunos autores han deducido de esta nota que el texto copiado sería un parecer conjunto de Cano, Soto y Blanco.

No obstante, el catálogo del Archivo cita también con la signatura PR, 21, núm. 145, un «parecer del Doctor Blanco sobre si se podría impedir la ejecución de las letras apostólicas expedidas a favor de los cabildos acerca de la inteligencia de los decretos del concilio de Trento, que suspendieron aquella ejecución». Este texto se perdió en el mencionado incendio, sin que se haya conservado copia alguna. El inventario registra que estaba formado por tres hojas autógrafas y firmadas. Por otra parte, ya hemos visto que fray Domingo de Soto escribió otro texto sobre la confirmación del concilio de Trento. Es cierto que el parecer de Soto no es tan completo ni detallado como los otros, pero por la diferencia de contenido tampoco puede ser considerado como un borrador para redactar éste conjuntamente con Melchor Cano. Por lo demás, un especialista en ambos autores como Beltrán de Heredia ha señalado que el estilo del dictamen concuerda claramente con otros textos de Cano, mientras que no se asemeja en nada al de Soto y que, además, está redactado usando el singular y no el plural <sup>74</sup>. Cabe conjeturar, por lo tanto, que el texto clasificado como PR, 21, núm. 146 es sólo de Melchor Cano, que el desaparecido núm. 145 debió ser del Doctor Blanco <sup>75</sup>, que el núm. 161 es el de Domingo de Soto y que antes del incendio los tres debían conservarse juntos en una misma carpeta.

Como es notorio, Melchor Cano (1509-1560) es uno de los más influyentes teólogos de la época. Profesor de las universidades de Alcalá y de Salamanca y teólogo imperial en el concilio de Trento, autor de la monumental e inacabada *De locis theologicis* (1563) donde expone su doctrina de tipo tomista. Influyente consejero de Carlos V y de Felipe II, sus intrigas serán determinantes, por ejemplo, para el encarcelamiento de su hermano de orden y arzobispo de Toledo, fray Bartolomé Carranza. Entre los dictámenes

<sup>73</sup> AGS, PR, 21, núm. 146. Publicado por CABALLERO, F., «Vida de Melchor Cano», en *Conquenses ilustres*, Madrid, 1871, II, pp. 489-499.

<sup>74</sup> BELTRÁN DE HEREDIA, V., *Domingo...*, op. cit., p. 344.

<sup>75</sup> Se trata con toda probabilidad de Francisco Blanco de Salcedo, nacido en Capillas (diócesis de León) en 1512, doctor en Teología por la universidad de Valladolid, donde fue también catedrático, y que desde 1545 era canónigo magistral de Palencia. Fue nombrado obispo de Orense en 1556, de Málaga en 1565 y arzobispo de Santiago en 1574, cargo que ejerció hasta su muerte en 1581.

que la Corona le encarga por estos mismos años destacan los dedicados a la revocación del subsidio y a la licitud de la guerra emprendida por Felipe II contra el Papa en 1557, que le valen la enemistad de Paulo IV.

En el tema que nos ocupa, dice Cano, existen dos opiniones probables, según se considere que la confirmación papal de los decretos es necesaria o no. Siendo ambas lícitas y probables, el Papa puede seguir la que quiera, aunque personalmente Cano opina que el concilio no tiene valor sin la confirmación pontificia. También da por aceptado que el Rey es justamente el protector de la Iglesia en sus reinos y que tiene el poder de «deshacer cualquier fuerza que a la Iglesia o a personas particulares de ella se le hiciere, quienquiera que fuere el que pretendiera hacerla».

En el problema planteado con los cabildos, según Cano hay que distinguir tres momentos diferentes. Antes del breve de Julio III, lo que hizo el príncipe Felipe es correcto, ya que si son justos los decretos y se admite que el Rey es protector de la Iglesia, no hay nada malo en ordenar su cumplimiento. No obstante, la palabra «mandamos» le parece inoportuna tratándose de leyes de la Iglesia que son intimadas a personas eclesiásticas, por lo que hubiera preferido «encargamos, exhortamos y amonestamos, etc.» El problema principal estriba en los decretos del concilio, que son ambiguos. Al haberse generado dudas sobre ellos, es el Papa quien debe dirimirlos.

Un segundo momento del proceso, el más importante y delicado, tiene lugar cuando Julio III promulga su breve. El Papa, incluso si hubiera presidido personalmente el concilio, conserva siempre su poder de cambiar los decretos o dispensarlos por causas legítimas. Pero si la causa para impedir la ejecución del concilio no es legítima y se trata de decretos muy importantes para el gobierno de la Iglesia o el bien del reino, el Rey puede, en tanto que protector de la Iglesia, resistir a la fuerza.

Esto implica que el Rey y el Consejo tienen autoridad para examinar las letras apostólicas, no con la finalidad de anularlas perpetuamente, sino de verificar si hay manifiesta fuerza. Ahora bien: si la fuerza no es manifiesta, sino dudosa, entonces debe remitirse de nuevo la causa al Papa suplicando que la juzgue con más información y atención. Lo contrario sería un grave sacrilegio, pues convertiría al Rey en juez del Papa y se incurriría en las penas previstas en la bula *In Coena Domini*. En efecto, igual que no se puede aceptar la doctrina de los canonistas que hacen depender el poder del Rey en materias seculares del poder del Papa, tampoco puede tolerarse que se inviertan los papeles. En cuestiones de fe y de religión ha de tener tan libre su autoridad el Papa como el Rey la suya en las que no lo son.

Por el contrario, ha errado el Consejo al ordenar a los prelados que prosigan sus visitas. El mandato del concilio da a los obispos facultad para actuar contra los obispos, pero no les obliga. Y cuando lo hacen es como delegados de la Sede Apostólica. Por consiguiente, si el Papa les ordena sobreseer la visita no contradice el mandato del concilio y, por otra parte, ejerce el derecho de revocar su delegación que asiste siempre a quien ha delegado un poder.

La tercera etapa del problema es la futura: prever que debe hacerse si Su Santidad procede con nuevos agravios contra los obispos o incluso el Consejo. En ese caso, debe considerarse, entre todo lo que es lícito, «lo que es expediente». Compara la situación de la Iglesia con la del enfermo que padece «contrarias enfermedades»: puede ser que el médico, queriendo sanar una, aplique un remedio que empeore la otra, por lo que tendrá que suspender el tratamiento. Tampoco el Consejo perdería autoridad si, ante nuevos peligros que antes no se podían predecir, cambia de opinión. Por eso los consejeros deben considerar que enemistándose por este motivo el Rey y el Papa puede generarse un peligro mayor que el beneficio que se podría obtener con la aplicación del decreto sobre los cabildos. Ya hay discordias con el Papa por los patronatos y las concesiones de beneficios a extranjeros,

y si tras esto ahora con toda fuerza se resistiese también en esto, otro día se resistiría en cosa que no fuese tan justa y otro día en otra, porque siempre iría creciendo el enojo y por ende el menosprecio, como lo han hecho otras naciones, y viendo el pueblo y el vulgo el ejemplo de los sabios, por fuerza había de menospreciar al Papa, que es abrir la puerta a la destrucción de la fe.

*Martín de Azpilcueta*<sup>76</sup>

El único texto encargado a un canonista es el de Martín de Azpilcueta, conocido a menudo con el sobrenombre de Doctor Navarro por su origen. Es también el único parecer redactado en latín y el más prolijo en su argumentación, tocando tanto aspectos generales de teoría política sobre la potestad del Papa y del Emperador, que no podemos detallar aquí, como aspectos concretos relativos al comportamiento de los cabildos. Azpilcueta (1492-1586) se había formado en las universidades de Cahors y Toulouse y era canónigo regular de san Agustín de la colegiata de Roncesvalles. Fue catedrático en Salamanca y en Coimbra, y defensor de su compatriota Carranza, a quien acompañó en su cautiverio en Roma.

Para Azpilcueta, el problema planteado se centra en dos cuestiones. La primera es establecer si Paulo IV es juez competente sobre la interpretación de los decretos tridentinos. En ese punto el Doctor Navarro es taxativo: cuando el concilio está disuelto, sólo el Papa puede fijar la interpretación de sus decretos, puesto que ninguna otra interpretación puede ser vinculante, aunque sea del Emperador, del Rey o de cualquier otra autoridad eclesiástica o temporal. Aún más, el Papa puede modificar o suprimir dichos decretos y conceder dispensas que eximan de su cumplimiento, puesto que, contrariamente a lo pretendido por los galicanos, la autoridad del concilio no está por encima de la del Papa. Dado que el concilio tiene una potestad espiritual y sobrenatural,

<sup>76</sup> AGS, PR, 21, núm. 196. El texto ha sido publicado por ARIGITA Y LASA, M., *El Doctor...*, op. cit., pp. 585-600, con un error cronológico, pues sitúa la redacción en 1567 (p. 295).

la interpretación de sus cánones a nadie más puede competer sino a quien tiene ese mismo poder espiritual y sobrenatural.

Según Azpilcueta, es cierto que los obispos y los reyes están obligados por la exhortación conciliar de 1552 a cumplir los decretos de Trento. Pero eso se entiende según el recto sentido de dichos decretos que, en caso de duda, sólo el Papa puede elucidar. También lo es que los reyes han recibido directamente su poder de Dios y que deben emplearlo para la conservación y tranquilidad pública de sus Estados, pero eso se entiende en los asuntos naturales y temporales, que son los propios de su dignidad, no en los espirituales y sobrenaturales.

La segunda cuestión planteada se centra en determinar si la autoridad regia puede impedir que Paulo IV declare sus intenciones a favor de los cabildos y que su interpretación surta efecto. De lo dicho se deduce que el Rey no puede hacerlo. Es cierto que con su vida indigna muchos capitulares han provocado escándalos, pero mayor escándalo sería ver que el Rey duda de la interpretación dada por el Romano Pontífice. De la misma manera que nadie puede negar el poder de derogar leyes que tiene el Emperador en el Imperio o un rey en su reino, no se puede negar el poder del Papa de interpretar e incluso abolir los decretos conciliares. El Rey y los obispos pueden en todo caso suplicar con reverencia al Papa, si constatan que de la aplicación de sus decisiones se sigue un gran escándalo, que las modifique, pero deben tener en cuenta la importancia de que sea honrada la autoridad del Pontífice y de la Sede Apostólica, que siempre se ha mantenido en España.

En resumidas cuentas, el parecer de los letrados es bastante desfavorable al Consejo de Castilla. Ninguno de los sabios consultados respalda totalmente la posición del Consejo. Algunos, como Muñatones o Azpilcueta, son incluso francamente contrarios: desde el momento en que el Papa se ha reservado la decisión, afirman, ni el Consejo ni nadie pueden oponerse. Para Cuesta, el Consejo no tiene facultad para mandar a los obispos que desobedezcan, salvo si le consta que el Papa ha procedido con mala intención. Soto cree que todas las teorías en discusión son probables. El corolario lógico de ese parecer sería, aunque Soto no lo diga, lo que afirma Cano: el Papa puede elegir la que crea más fundamentada. Cano señala que el Consejo puede mantener el *exequatur* regio para evitar fuerzas manifiestas, pero no obligar a los obispos a proseguir las visitas. Azpilcueta y Cano creen, además, que razones de oportunidad política aconsejan ceder para evitar un nuevo enfrentamiento con la Santa Sede.

El hecho de que todos los pareceres solicitados versen sobre las respectivas facultades del Papa y del Rey en orden a la ejecución del concilio y que no hablen apenas de la relación entre obispos y cabildos muestra bien el verdadero trasfondo del problema: se trata de un asunto político, sobre la relación entre justicia civil y eclesiástica, más que de una cuestión de moralidad o de disciplina eclesiástica.

No parece tampoco que los dictámenes hayan perjudicado la carrera de sus autores, antes al contrario. Muñatones, Cuesta y Blanco serán obispos. Soto y Cano continuarán

gozando del favor real, este último incluso contra la opinión de la Santa Sede. Sólo Azpilcueta llegará a ser visto con desconfianza por Felipe II, pero eso se debe a su oposición después del concilio a aspectos esenciales de la política regia como la reforma de las órdenes claustrales o el juicio contra Carranza. No deja de sorprender, sin embargo, que tres de los peritos consultados por el Consejo de Castilla (Cuesta, Azpilcueta y Blanco) sean canónigos, aunque sea en cabildos que no están en el centro de las disputas, bien por ser colegiales (Alcalá y Roncesvalles), bien porque el clero se ha comportado pacíficamente (Palencia). Sólo uno de los letrados estudiados, Melchor Cano, tiene por entonces rango episcopal, aunque no ejerce jurisdicción sobre ninguna diócesis tras su renuncia a la sede de Canarias.

Con todo, los dictámenes deben haber hecho mella en los consejeros de Castilla. Consta al menos que afectaron a su presidente, el obispo Fonseca, quien el 14 de junio de 1556 escribe a Felipe II que los asuntos del concilio se han comunicado

con los más doctos y principales teólogos que hay en el reino, los cuales están conformes en el punto que se les ha propuesto y tienen por inconveniente que el consejo se entrometa (después que vinieron los breves así de Julio como de Paulo IV) a dar las provisiones que antes solía, pareciéndoles que no lo pueden hacer y que al Papa sólo pertenece la declaración e interpretación del concilio.

Por eso el escrupuloso obispo solicita instrucciones al Monarca, ya «que todos los teólogos muy contrarios están de lo que en Consejo se hace y así querrían que este negocio se llevase por otro camino»<sup>77</sup>. Es probable, por lo tanto, que el relativo apaciguamiento que experimenta el conflicto entre obispos y cabildos por asuntos de jurisdicción a partir de 1557 no sea debido sólo a la guerra entre Felipe II y Paulo IV, sino también a cierto retraimiento del Consejo de Castilla influido por las opiniones que hemos visto.

## Epílogo

La disputa entre los obispos y los cabildos no acaba con los breves de Paulo IV. En varias diócesis persisten los problemas en tiempos de Pío IV. Cuando el Papa convoca la tercera etapa del concilio de Trento, representantes de varios cabildos se reúnen en Toledo para concertar sus posiciones, pero Felipe II les impide actuar. El Rey ordena además que sea expulsado de Trento el agente de los cabildos castellanos, el maestrescuela de Segovia Pedro Arias Osorio, cuya principal misión es procurar la revocación del decreto aprobado en 1547.

Al acabar el concilio, en diciembre de 1563, los cabildos mantienen su resistencia. El 25 de junio de 1564 celebran una junta en Valladolid que solicita a Pío IV la revocación

---

<sup>77</sup> AGS, E., leg. 114, fol. 189.



de los decretos tridentinos que les afectan. La reunión, a escondidas del Rey, provoca represalias de Felipe II y nuevas órdenes del monarca insistiendo en que el concilio debe ser puesto en ejecución sin aceptar ningún tipo de interferencia papal. A diferencia de lo ocurrido anteriormente, los letrados consultados por Felipe II, casi todos obispos, se muestran ahora mayoritariamente partidarios de que el soberano asuma el control de la aplicación del concilio, si es necesario evitando las intrusiones y las dispensas que puedan llegar desde Roma.

En 1565-1566 se celebran los concilios provinciales de Toledo y de Santiago (éste tiene lugar en Salamanca), para aplicar en cada provincia eclesiástica los decretos tridentinos. Los cabildos multiplican sus protestas. Con el apoyo de Roma, consiguen en 1567 un acuerdo entre Pío V y Felipe II que modera algunos de los decretos provinciales y que fija el marco jurídico de las relaciones entre prelados y canónigos. No obstante, éstas seguirán siendo conflictivas durante el resto de la centuria.

Es cierto que el concilio de Trento ha introducido muchas medidas que afectan a la estructura y al funcionamiento de los cabildos. Sus decretos son el instrumento legislativo fundamental para que los obispos puedan abordar la reforma de los cabildos. Pero ni jurídica ni políticamente los cabildos han quedado inermes frente a la consolidación y la ampliación del poder episcopal que Trento comporta. Disponen todavía de mecanismos de resistencia que van a utilizar sabiamente, en particular la exigencia de que la interpretación de los cánones conciliares sea una competencia exclusiva de la Santa Sede.

Durante todo este tiempo, los temas sujetos a discusión siguen siendo los mismos: si la ejecución del concilio y la interpretación de sus puntos dudosos competen al Rey o al Papa. También las alianzas permanecen invariables: la Santa Sede apoya a los cabildos, convencida de que son la garantía del respeto a la jurisdicción papal en la Corona de Castilla; el Consejo de Castilla respalda las actuaciones de los obispos que deben enfrentarse a sus cabildos. Como en tiempos de Carlos V, la estrategia de los cabildos cuando tienen un problema disciplinar con su prelado pasa por crear un conflicto de jurisdicción entre el Papa y el Rey. Se puede constatar, en suma, que la política definida por Carlos V sobre este tema en la década de 1550 es prácticamente idéntica a la que adoptará Felipe II en la década de 1560.

Más allá de los aspectos coyunturales y personales, las disputas entre los cabildos y los obispos, así como la intervención de la Corona y de la Santa Sede en ellos, responden a razones estructurales que se mantienen durante toda la segunda mitad del siglo XVI. Existen, a menudo, problemas entre obispos reformadores y capitulares indignos que intentan utilizar las exenciones para mantener conductas irregulares o incompatibles con la Reforma Católica. Pero, la firmeza de los canónigos de Calahorra, de Segovia o de Zamora, capaces de arrostrar durante años duras penas de cárcel, confiscaciones y destierros, no cuadra bien con ese estereotipo.

Subyacen tras estas disputas problemas eclesiásticos y políticos de envergadura. En primer lugar, si el concilio de Trento quiere establecer con claridad que el fin principal

de la Iglesia es la cura de almas y consolidar, para llevarla a cabo, a la jerarquía episcopal, los obispos deben supeditar todos los recursos humanos y económicos de la Iglesia a la consecución de ese objetivo. Pero esta voluntad no es compartida por todo el clero y, en particular, por aquellos que, como los cabildos, hasta entonces han venido considerándose exentos de las tareas pastorales. En segundo lugar, ni la Corona ni el Papado quieren que la aplicación del concilio de Trento, en los decretos sobre los cabildos o en otros, comporte una pérdida de su poder sobre el clero. Por eso ambos intentan imponer sus criterios de interpretación del concilio y supervisar su aplicación en cada diócesis <sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Todos estos aspectos se encuentran mucho más desarrollados en FERNÁNDEZ TERRICABRAS, I., *Felipe II y el clero secular. La aplicación del Concilio de Trento*, Madrid, 2000.